

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “FORMACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LAS SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN: VALORA-MADRID” A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON CARGO AL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA – FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATIONEU

1. JUSTIFICACIÓN

2. OBJETO DEL CONTRATO

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVOS GENERALES

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4. DESTINATARIOS

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

6. MEDIOS MATERIALES

7. RECURSOS HUMANOS

- Equipo profesional: composición y sustituciones
- Huelga legal

8. SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN

9. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

1. JUSTIFICACIÓN

El artículo 39 de la Constitución Española, establece la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y, en especial, de los menores de edad.

Las reformas operadas a través de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y la Ley 26/2015, de 28 de julio, ambas de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia han tenido un hondo calado en las instituciones de protección a la infancia y la adolescencia, a la vez que han aparejado un notable cambio en la regulación de la desprotección de menores, en general, y de la situación de riesgo, en particular dándole un mayor detalle, así como en las herramientas formales a emplear por las Entidades Públicas para su valoración y declaración.

En concreto, la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en su artículo 6 especifica como uno de los principios rectores de la actuación de los poderes públicos en relación con los niños: la prevención y la detección precoz de todas aquellas situaciones que puedan perjudicar su desarrollo personal.

Por otra parte, el Decreto 51/2023, de 3 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan la Historia Social Única, el Registro Único de Usuarios y otros instrumentos de gestión de la información del Sistema Público de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, regula la creación, estructura, uso, acceso, alcance y funcionamiento de elementos integrados en el Sistema de Información del Sistema Público de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, en especial de la Historia Social Única y el Registro único de usuarios, junto con otros instrumentos orientados a facilitar la acción coordinada de los servicios sociales y la mejora de su calidad, en beneficio de todos los ciudadanos.

La Historia Social Única de la Comunidad de Madrid (en adelante HSU) constituye el instrumento técnico básico que permite la relación entre los servicios sociales de Atención Primaria y Especializada, así como la interrelación y coordinación con otros sistemas de protección social, con la finalidad de conseguir la continuidad y complementariedad de las intervenciones, además de promover la accesibilidad, la comunicación y la prestación de servicios, constituyendo un instrumento imprescindible para el diagnóstico y para la elaboración del proyecto de intervención social más adecuado que garantice el carácter integral de la intervención.

La HSU Se compone de una serie de sistemas que cubren las diferentes áreas de ámbito autonómico entre las que se encuentra Infancia y Familia. Para ello, se ha diseñado un módulo específico denominado Sistema de Atención y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia (SAPIIA) que recoge las necesidades de gestión de los procesos asociados a la vida del menor y de las posibles situaciones de desprotección y maltrato, y permitirá, entre otras funcionalidades, comunicar las situaciones de violencia infanto-juvenil desde los diferentes dispositivos relacionados con la infancia y la adolescencia, identificar y valorar, por parte de los profesionales, el riesgo de las situaciones de desprotección que puedan afectar al menor.

Para ello, se contempla la existencia en el sistema SAPIIA de varios módulos entre los que se incluye el Módulo para el uso del instrumento de valoración del riesgo social, VALORA-

MADRID, que permita ayudar a profesionales de los Servicios Sociales (municipales y especializados) en la identificación y valoración de la gravedad de las situaciones de desprotección que pueden afectar a un niño, niña o adolescente en su familia.

Para el desarrollo de este módulo se ha tomado como base la Herramienta de valoración de la gravedad de las situaciones de desprotección: Valora-Madrid (en adelante VALORA-MADRID), que fue desarrollada en 2023 y, posteriormente, ha sido actualizada como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 4/2023, de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid y para adecuarla a las características y requerimientos técnicos del entorno de la HSU.

Será imprescindible para el trabajo que deben desarrollar todas las Administraciones Públicas en la Comunidad de Madrid, al objeto de que todos orienten en el mismo sentido su intervención. De esta forma se dispondrá de datos estadísticos fiables y un acceso a la información de manera inmediata, junto con la posibilidad de poder planificar medidas preventivas necesarias facilitando una mejor coordinación entre los profesionales de serlos servicios sociales municipales y autonómicos.

Para que este instrumento pueda ser adecuadamente puesto en marcha y todos los profesionales y ciudadanos puedan beneficiarse de su utilidad, resulta imprescindible proporcionar una formación adecuada a los profesionales de los servicios sociales para que puedan prestar una atención de calidad y que contribuya a su vez a prevenir futuras medidas de protección para los niños y adolescentes.

La Ley 12/2022, de 21 de diciembre, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid señala la necesidad de la formación continua de los profesionales del sistema de servicios sociales considerada como soporte instrumental para conseguir unos servicios sociales más eficientes, eficaces, de mayor calidad. En su artículo 77 señala que las Administraciones públicas madrileñas promoverán la mejora de la calidad del Sistema Público de Servicios Sociales y, en especial, la cualificación y formación de los empleados públicos que lo integran, así como la investigación. Asimismo, en su artículo 87, se especifica que la consejería competente en materia de servicios sociales promoverá una formación especializada, inicial y continua, dirigida al conjunto de profesionales del Sistema Público de Servicios Sociales, sin perjuicio de la colaboración con la consejería competente en la formación del personal propio de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, regula la formación especializada, inicial y continua de los profesionales que tengan un contacto habitual con personas menores de edad.

Asimismo, la Ley 4/2023, de 22 de marzo, recoge en su artículo 57, relativo a la cualificación de los profesionales que la Comunidad de Madrid y las entidades locales, promoverán la realización de actividades y programas y garantizarán la formación inicial y permanente, y fomentarán la formación continua de profesionales de todas las áreas y sistemas que atienden e intervienen con la infancia y adolescencia para lograr su cualificación específica y fortalecer su capacidad innovadora, incorporando en su formación las materias relacionadas con la prevención y la protección frente a la violencia.

2. OBJETO DEL CONTRATO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto describir las obligaciones, condiciones técnicas y actividades específicas que deben de ser asumidas y desarrolladas por la adjudicataria del Contrato de Servicios denominado “Formación en la aplicación de la herramienta de valoración de la gravedad de las situaciones de desprotección: Valora-Madrid”.

Este contrato de servicios tiene por objeto la impartición de formación para los profesionales y gestores de Atención Social Primaria, de Atención Social Especializada, así como de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad sobre la Herramienta de valoración de la gravedad de las situaciones de desprotección: Valora-Madrid.

Este proyecto está financiado al 100% por la Unión Europea (NextGeneration EU) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la Comunidad de Madrid. Dentro del Proyecto Inversión P03 Transformación Tecnológica en servicios sociales (LÍNEA C22.I2.P03). N° de Actuación: S-36.

3. OBJETIVOS

Objetivo general:

Proporcionar formación en el adecuado uso de VALORA-MADRID como instrumento unificado para todos los profesionales implicados en la valoración de las situaciones de desprotección de menores de edad en la Comunidad de Madrid.

Objetivos específicos:

- Diseñar el programa de formación en el uso de VALORA-MADRID, que incluya un sistema de grabación de las sesiones para formación de futuros profesionales.
- Impartir la formación en el uso de VALORA-MADRID.
- Proporcionar apoyo técnico y realizar un seguimiento y evaluación de la posterior utilización de dichas herramientas durante la vigencia del contrato.

4. DESTINATARIOS

El contrato está dirigido a:

- Profesionales del Sistema Público de Servicios Sociales, tanto de Atención Social Primaria como de Atención Social Especializada que trabajen con menores de edad y sus familias.
- Profesionales de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad.

El perfil de los participantes incluye directivos, responsables y mandos, técnicos y técnicos de apoyo. Se podrá dar cabida a los diferentes colectivos cuando las necesidades del proyecto así lo requieran.

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

5.1. Diseño del programa de formación:

Programación, diseño de los grupos, objetivos, contenidos, elaboración de materiales, recursos didácticos, metodología, calendarización, puesta en marcha de las actividades formativas y evaluación de las mismas.

La formación en VALORA-MADRID deberá cubrir el espectro de las temáticas, ideas y áreas de conocimiento que se relacionan a continuación, pudiéndose solicitar en todo caso, combinaciones o derivaciones de las mismas en función de las necesidades concretas a tratar. Asimismo, se podrán requerir otras de naturaleza similar a las descritas:

- Marco general de actuación de los servicios sociales municipales y autonómicos de atención y protección a la infancia y adolescencia de la Comunidad de Madrid.
- Marco legislativo de la herramienta VALORA-MADRID y su encuadre en la HSU.
- Intervención de los servicios sociales municipales y autonómicos de atención y protección a la infancia y adolescencia de la comunidad de madrid en situaciones de desprotección

- Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de desprotección: Valora-madrid.

En la organización de los grupos formativos, se tendrá en cuenta la zonificación del Sistema Público de Servicios Sociales (norte, sur, este, oeste y Madrid Capital) y el número de profesionales.

La calendarización deberá incluir el cronograma, el horario y duración de las acciones formativas, teniendo en cuenta la zonificación, el número de grupos, y el número de alumnos por grupo.

La empresa adjudicataria deberá establecer los mecanismos que aseguren la calidad de los trabajos realizados, entre otros medios, a través de los Cuestionarios de Evaluación de la Calidad de las Acciones Formativas en las Empresas (cuestionario de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo).

Asimismo, cumplimentarán un cuestionario dirigido a conocer su valoración acerca de la utilidad y experiencia de aplicación de VALORA-MADRID.

5.2. Impartición de las acciones formativas.

Las acciones formativas a los profesionales del Sistema Público de Servicios Sociales se organizarán en función de la distribución territorial de la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta las distintas Áreas de Servicios Sociales, y así como a los técnicos de la DGIFFN.

En todo caso, se deberá formar a todos aquellos profesionales que se indiquen desde la Dirección General. Asimismo, habrá de primar el ajuste necesario para el aseguramiento del aprendizaje por parte de todos y cada uno de ellos.

La metodología empleada debe incluir diversas técnicas que permitan trabajar las temáticas incluidas con la mejor solución en cada caso. Sin ánimo de exhaustividad se exponen a modo de ejemplo las siguientes: Exposición de contenidos, estudio del caso, ejercicios colaborativos, simulaciones, etc. El componente práctico y participativo ha de jugar, en todo caso, un lugar preeminente en el abordaje de la formación.

La duración de la formación podrá variar en función del colectivo al que vayan dirigidos, si bien, en todo caso será de al menos 10 horas que se distribuirán, como regla general, en dos sesiones sin que puedan transcurrir más de dos meses entre una y otra.

El sistema deberá generar registros de interacción con el programa, tanto de la asistencia tutorial como de los controles de aprendizaje permitiendo el seguimiento del proceso formativo de los participantes.

La modalidad de la impartición será presencial o Aula Virtual, según lo indicado en cada momento por la Dirección General.

La formación presencial podrá realizarse tanto en las instalaciones habilitadas al efecto por la Dirección General como en los lugares previamente acordados y adecuados a los efectos oportunos de cada caso que ofrezca la empresa proveedora.

La formación deberá contar con soporte documental, ya sea digital o físico, dependiendo de los casos y tal y como se indique por parte de la Dirección General, de manera que permita a los participantes la adecuada interiorización y/o repaso y consulta de los conceptos, herramientas o ideas transmitidos.

El orden y entrega de la documentación estarán en función de la dinámica del curso y, salvo ajustes detectados en base al control y seguimiento, quedarán a discreción de formador. En todo caso, será responsabilidad de la empresa adjudicataria facilitar toda la documentación técnica o de soporte asociada al curso en castellano. En el caso de entregar documentación en papel, se entregará en un número de copias igual al número de asistentes. Si la documentación se entrega en soporte digital será preparada por la empresa adjudicataria por este medio y entregada para el correcto seguimiento del curso. En todo caso deberá facilitarse un ejemplar a la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad.

Los contratistas deberán cumplir todos los protocolos higiénico-sanitarios que puedan surgir durante el tiempo que dure el contrato.

Tras la formación, los/as profesionales participantes recibirán la indicación de utilizar las nuevas herramientas en su trabajo cotidiano durante un período de 3-4 meses (piloteo).

En aquellos casos que la Dirección General determine, la empresa adjudicataria deberá realizar las pruebas de aptitud necesarias que sirvan para medir el grado de aprendizaje de los alumnos, y facilitará los resultados o informes en el formato indicado para cada caso.

Los diplomas los elaborará la empresa adjudicataria de acuerdo a las instrucciones de la Dirección General, pero habrá de incluir necesariamente y como mínimo, la información necesaria y cumplir con las medidas de información, comunicación y visibilidad de las actuaciones financiadas con cargo al PRTR.

5.3. Actuaciones de apoyo y seguimiento posterior.

La empresa adjudicataria proporcionará apoyo técnico continuado (vía telefónica y online) para la resolución de dudas o consultas en relación a la aplicación de las nuevas herramientas a los participantes en las acciones formativas tanto durante la realización de las mismas como durante los 6 meses posteriores o hasta la finalización de la vigencia del contrato.

6. MEDIOS MATERIALES

6.1. Espacio formativo

La formación presencial podrá realizarse tanto en las instalaciones habilitadas al efecto por la Dirección General, como en los lugares previamente acordados y adecuados a los efectos oportunos de cada caso que ceda cada Ayuntamiento o en los proporcionados, en su caso, por la entidad adjudicataria.

La entidad adjudicataria deberá disponer durante la realización de las acciones formativas de los medios y materiales suficientes para el correcto desarrollo del curso, que, en todo caso, debe incluir:

- Material de aula y didáctico.
- Medios audiovisuales.
- Hardware y Software necesarios para la impartición de la formación.

7. RECURSOS HUMANOS

- **Equipo profesional: composición y sustituciones**

La entidad deberá contar para la ejecución del contrato con un equipo adecuado y suficiente para realizar las tareas que se le encomiendan y deberá estar compuesto por al menos, los siguientes profesionales:

- Dos formadores cualificados, con titulación en Psicología o Trabajo Social, con experiencia de al menos 2 años en intervención con niños en situación de riesgo o dificultad social y sus familias y, al menos, 1 año de experiencia docente en la materia, demostrada con certificación o por formación impartida

En caso de que, una vez iniciada la prestación del servicio, se produzca alguna modificación en la plantilla de personal por cualquier motivo, la entidad remitirá a la Dirección General, en el plazo máximo de cinco días hábiles desde que se produzca, la plantilla de personal actualizada y el certificado en que conste que el personal se ajusta a lo establecido en este pliego.

En el plazo máximo de 10 días hábiles la adjudicataria procederá a la sustitución del trabajador por otro que cumpla con los requisitos del pliego.

En el caso de ausencias de carácter coyuntural e imprevisible de los trabajadores inferiores a tres días la adjudicataria deberá garantizar el cumplimiento del servicio.

- **Dependencia del personal.**

Corresponderá exclusivamente a la entidad adjudicataria la selección del personal que, reuniendo los requisitos de titulación exigidos en los pliegos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad del cumplimiento de los requisitos de solvencia profesional, con carácter previo a la contratación.

Este personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador del mismo, siendo la Dirección General ajena a dichas relaciones laborales. La entidad prestataria ejercerá de modo real el poder de dirección inherente en relación con sus trabajadores, asumiendo la negociación y el pago de los salarios, la organización del trabajo, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la imposición de sanciones, el calendario laboral, la formación del personal y cuantos efectos de Seguridad Social procedan, en particular cotizaciones y pago de prestaciones.

Dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídica ni laboral con la Comunidad de Madrid, con independencia de las funciones de control e inspección que la Consejería con competencias en Servicios Sociales pueda ejercer sobre el servicio.

En el desempeño de su tarea, los formadores estarán convenientemente acreditados por la entidad adjudicataria, de forma que permita su rápida e inequívoca identificación como trabajadores de la entidad adjudicataria cuando desarrollen su trabajo cobertura de la totalidad del horario establecido de apertura del servicio.

- **Huelga legal**

En casos de huelga legal se establecerán por la entidad los servicios mínimos que determine la normativa aplicable y el coordinador del servicio lo comunicará con la antelación necesaria a la Dirección General.

En el supuesto de huelga legal en el sector al que pertenecen los trabajadores adscritos al servicio el coordinador del servicio deberá mantener informado personalmente a la Dirección General de las incidencias y desarrollo de la huelga.

Una vez finalizada ésta, la adjudicataria deberá presentar un informe en el que se indiquen los servicios mínimos prestados y los servicios que, en su caso, se hayan dejado de prestar. Dicho informe deberá presentarse en el plazo de una semana tras la finalización de la huelga.

Una vez comprobados los incumplimientos producidos como consecuencia de la huelga, la Dirección General valorará la deducción que corresponda en la factura correspondiente al periodo en que se haya producido la huelga legal. Dicha valoración se comunicará por escrito a la adjudicataria para su deducción en la factura correspondiente o, en su caso, en la del siguiente periodo de facturación.

8. SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN

El responsable del contrato será la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, que determinará y supervisará por sí o a través del personal técnico de dicha unidad, los criterios técnicos en la prestación del servicio y la supervisión de las actividades realizadas.

Corresponde a la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad la dirección y supervisión de cada una de las formaciones, pudiendo autorizar modificaciones a su contenido, siempre dentro de la temática descrita en este Pliego, o cancelarlas en el caso de que existan razones suficientes para ello.

La Dirección General fijará reuniones periódicas con el adjudicatario con el fin de determinar, analizar y valorar las incidencias que, en su caso, se produzcan en la ejecución del contrato.

Si perjuicio de lo anterior, la Dirección General se reserva la facultad de efectuar el control que estime necesario para comprobar las condiciones y calidad de la prestación del servicio.

El adjudicatario colaborará con la Dirección General en todos aquellos aspectos en los que ésta lo solicite siempre y cuando estén relacionados con el objeto del presente contrato.

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a facilitar al responsable, en todo momento, la información y documentación que éste solicite para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan las ediciones formativas (Hojas de Firma, Encuestas de Satisfacción, etc.), así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y/o ajustes utilizados para resolverlos.

El adjudicatario debe informar por correo electrónico a la Dirección General sobre cualquier incidencia significativa el mismo día en que se produzca. Se entiende por incidencia significativa aquella que dé lugar a la suspensión de la actividad del servicio o que afecte a la prestación del mismo, a facilitar puntualmente cuanta información le sea requerida en relación con la misma.

El adjudicatario deberá informar al responsable con periodicidad mensual sobre las actividades llevadas a cabo, así como sobre distintos aspectos del funcionamiento y calidad de los servicios prestados. En particular deberá informar acerca del número de acciones formativas desarrolladas, fechas, lugar de realización, duración de las mismas, número de participantes desglosado por sexo y ámbito de procedencia y aquellos otros que en su caso pudieran indicarse por parte de la Dirección General.

Además, deberá presentar a la finalización de cada acción formativa un informe del cumplimiento de los servicios, en el formato que defina la Dirección General, con especial atención a los casos en que, a opinión del formador, se detecte falta de aprovechamiento o cualquier circunstancia relevante y una memoria final de las actividades realizadas y los resultados obtenidos a la finalización del contrato.

9. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

- Organizar, desarrollar y ejecutar los contenidos especificados en el contrato, gestionando de manera diligente todos los medios y recursos, tanto materiales como personales, necesarios para su ejecución, todo ello de conformidad con las indicaciones de la Dirección General.
- Poner a disposición de la Dirección General toda la información funcional, económica, técnica o cualquier otra relacionada con la actividad del servicio contratado, cuando así se solicite, para el seguimiento de la prestación del servicio.
- Conocer y aplicar, en todo caso, la legislación vigente en la Comunidad de Madrid, en el Estado y en la Unión Europea en materia de protección a la infancia y adolescencia y en materia de protección de datos personales, así como la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.

- Elaborar los informes de seguimiento mensuales y tras la finalización de cada acción formativa, así como la memoria final de las actividades realizadas y los resultados obtenidos a la finalización del contrato, sin perjuicio de cuantos informes sean necesarios a solicitud de la Dirección General.
- El adjudicatario asumirá todas las responsabilidades que pudieran resultar de la realización y utilización de los estudios y que pudieran derivarse de eventuales derechos de propiedad intelectual, industrial o de marcas, cuya titularidad correspondiera a terceras personas o entidades ajenas al presente contrato.
- En todo caso, en los documentos que elabore la adjudicataria por razón de este contrato, deberá constar además de su distintivo identificativo el propio de la Comunidad de Madrid y el de la Unión Europea, ajustándose a los criterios previstos en estos pliegos en el apartado “comunicación e imagen corporativa”.
- El adjudicatario deberá cumplir con el deber de secreto y confidencialidad sobre los datos o informaciones de los que tenga conocimiento durante la ejecución del contrato, estando obligados a no hacer públicos ni enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual. La empresa adjudicataria se compromete a no dar información ni datos proporcionados por la Consejería, para cualquier uso no previsto en las presentes condiciones.
En particular, no proporcionará, sin autorización expresa de este centro directivo, copia de los documentos o datos a terceras personas.
- Todos los documentos que genere la adjudicataria deberán estar en formato digital y firmados por los profesionales con firma electrónica.

Obligaciones específicas relativas al Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea:

La adjudicataria estará sometida a las obligaciones específicas relativas a la información y publicidad, control, verificación, seguimiento, evaluación y demás obligaciones impuestas por la normativa interna y de la Unión Europea que para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE se establezcan y cuya aplicación sea de obligado cumplimiento.

En la prestación del servicio, la Adjudicataria garantizará el pleno cumplimiento del principio de “no causar daño significativo” (Principio “do not significant harm – DNSH) y el etiquetado

climático y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y en el Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en todas las fases de ejecución del proyecto.

A efectos de cumplir con las actuaciones de comprobación y de conformidad con lo establecido el artículo 22.2.f) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018 («Reglamento financiero»), la adjudicataria, como perceptor final de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, deberá conservar los documentos justificativos, los datos estadísticos y demás documentación concerniente a la financiación, así como los registros y documentos, en formato electrónico y por un periodo de cinco años desde que se abonara el saldo de la operación financiera.

Para garantizar la constancia de estas obligaciones, la adjudicataria deberá suscribir la “Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR)”, que figura como Anexo en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En dicha Declaración deberá comprometerse por escrito a conceder los derechos y el acceso necesarios para que el ordenador competente, la Fiscalía Europea respecto de los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada en virtud del Reglamento (UE) 2017/1939, la Oficina Europea de lucha contra el fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas y, cuando proceda, las autoridades nacionales competentes, ejerzan plenamente sus competencias respectivas. En el caso de la OLAF, dichos derechos incluirán el derecho a realizar investigaciones, entre otras cosas inspecciones y controles in situ, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) nº 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, así como garantizar que los terceros implicados en la ejecución de fondos de la Unión Europea concedan derechos equivalentes

A su vez, la adjudicataria está obligada a suscribir el “Compromiso de cumplimiento de principios transversales en relación con la ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) en relación con la ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR)” que figura como Anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Al presente contrato le será de aplicación lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como lo establecido en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se estará igualmente a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021; y en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 («Reglamento Financiero»).

Comunicación e imagen corporativa:

La adjudicataria no podrá realizar ninguna actividad de comunicación o difusión del objeto del contrato ni emplear la imagen corporativa de la Comunidad de Madrid sin previo conocimiento y consentimiento expreso del responsable del contrato.

Tampoco podrá utilizar con fines de publicidad o de marketing las imágenes de los menores y/o de las familias atendidas sin autorización de la Comunidad de Madrid.

Además, al ser una licitación financiada con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, las adjudicatarias deberán cumplir con las obligaciones de información y publicidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

A tal efecto, deben adoptar medidas de información, comunicación y visibilidad de las actuaciones financiadas (banners en webs o aplicaciones informáticas, carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), incluyendo los siguientes logos:

- El emblema de la Unión Europea.
- Junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU».
- Se tendrán en cuenta las normas gráficas y los colores normalizados establecidos en el anexo I del Reglamento de Ejecución 821/2014 de la Comisión de 28 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. También se pueden consultar las siguientes páginas web: <https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual> y descargar distintos ejemplos del emblema en https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es#download.

Firmado digitalmente por: SILVIA VALMAÑA OCHAITA - ***6248**
Fecha: 2025.04.10 11:39

- Se incluirá el logo oficial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Reino de España, y una referencia a la gestión por la Consejería de Familia, Juventud y Política Social. A tal efecto se tendrán en consideración las indicaciones que se adopten sobre la comunicación digital del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR).

MADRID, a fecha de firma
LA DIRECTORA GENERAL DE INFANCIA,
FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

Fdo. Silvia Valmaña Ochaíta